

*Plaza pública*

para la edición del 3 de mayo de 1995

## El gobierno a examen

Miguel Ángel Granados Chapa

En dos dimensiones, y con repercusiones de diverso orden, el gobierno estuvo expuesto al examen público durante este fin de semana largo. Y no fue aprobado. El domingo, en las elecciones extraordinarias efectuadas en dos distritos donde se anularon previos triunfos del partido gubernamental, la votación en favor de sus candidatos se vino abajo estrepitosamente. Y el lunes, si se utilizara una metáfora deportiva y se hace un cálculo conservador para medir las presencias públicas en pro y en contra, podría decirse que el marcador fue adverso al gobierno al son de diez a uno.

En Atlixco y en San Andrés Tuxtla (cabeceras de los distritos IV de Puebla y XXII de Veracruz, respectivamente) los comicios no atrajeron a los votantes en medida semejante a la del año pasado. Diversos factores, inherentes a la naturaleza misma de la elección y a las circunstancias del entorno, explican el crecimiento de la abstención, pero debe subrayarse que la tasa de pérdidas priístas fue mayor que la del ausentismo. En efecto, de casi cincuenta mil votos obtenidos en el distrito poblano, el PRI pasó a unos 16 mil, mientras que en el sur veracruzano sus 58 mil sufragios se redujeron a menos de la mitad, apenas a 23 mil votos. Es verdad que los datos definitivos se

conocerán sólo hoy, cuando se practiquen los cómputos distritales, pero es un hecho que el partido gubernamental perderá la diputación en Atlixco. La de San Andrés se definirá cuando se conozca la totalidad de las actas oficiales. Los resultados preliminares permitieron conocer, el lunes al mediodía, las cifras de 294 de las 312 casillas y los contendientes principales, PRI y PRD, estaban muy cerca el uno del otro, con diferencia unos trescientos votos en favor del primero. Con base en sus propias copias, cada partido se atribuye la diputación. Pero aun si ésta quedara en manos del PRI, aparte el conflicto que en todo caso genera una votación con diferencias tan breves, agravado por el contexto regional, quedará claro que los votantes priístas no acudieron a las urnas por alguna poderosa razón que quizá significa rechazo a ese partido.

Son más explícitas, y por lo tanto menos sujetas a interpretación las causas que llevaron a una enorme multitud al Zócalo, anteayer. Se trató de un referéndum, en que la cuestión a debate era la política gubernamental, a que los manifestantes se opusieron rotundamente. Es cierto que la marcha fue citada con motivo del Día del Trabajo, y por lo tanto los temas laborales, como el disminuído poder adquisitivo del salario y el desempleo, así como el caso del sindicato de Ruta 100, aparecieron en buena parte de las expresiones de los asistentes. Pero también lo es que la presencia de delegaciones de El barzón, el agrupamiento de deudores, originalmente sólo agropecuario pero después ampliado a todo el espectro productivo, significaba cuestionar otras áreas de la

política económica, como la privatización bancaria y el programa de emergencia económica.

Pero durante el recorrido que unos grupos iniciaron en Chapultepec, otros en la columna de la Independencia y otros más en la Alameda, y en el masivo abordaje del Zócalo, prevaleció un enjuiciamiento general al régimen. Adquirió expresión corpórea en la crítica a la corrupción, encarnada en la representación del ex presidente Salinas preso en Almoloya, y los varios modos de apoyo y solidaridad al zapatismo, que implica una radical posición en pos de la justicia social. Pero quizá de no manifestarse de esas maneras específicas se hubiera podido igualmente percibir, porque flotaba en el ambiente. No se trataba, como en otros casos de asistencia multitudinaria a la Plaza de la Constitución de protestas o tomas de posición respecto de asuntos determinados. Fue, si se admite la comparación vulgar, una especie de eructo colectivo, demostración de un hartazgo que, paradójicamente, no viene de la saciedad sino de su contrario.

Contribuyó a que se escribiera en el ambiente capitalino este mensaje, la doble circunstancia de que el episodio se reprodujera en muchas ciudades del país, y de que contrastara con el tímido, casi subrepticio homenaje que el obrerismo oficial hizo al Presidente de la República, a pesar de los daños inferidos por la política oficial al sector de los asalariados. La decisión misma del Congreso del Trabajo (adoptada espontáneamente allí o asumida por instrucciones superiores) reviste un simbolismo cuyo desciframiento

debe ser emprendido cuanto antes. Acaso significa la retirada de lo viejo ante lo nuevo, aunque este factor aparezca difuso, desorganizado y circunstancial. El hecho mismo de que el propio Presidente hubiera deseado exorcizarlo, lamentando que se exacerben los conflictos (cuando que lo grave es que surjan, no que se aprovechen o magnifique, y en su causa hay calara responsabilidad gubernamental) muestra que el gobierno ha pasado a la defensiva, siendo que una de sus características fue contar siempre con la iniciativa.